

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

**VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO**

(S-2220/14)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - La presente ley establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario se realice la Jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” con el objetivo de que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.

Artículo 2º - A los fines de esta ley se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 26.485.

Artículo 3º - El Ministerio de Educación, con la colaboración de los organismos correspondientes, deberá:

- a) asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de Educación, a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la implementación y profundización de los lineamientos y contenidos de la jornada que se establece en el artículo 1º;
- b) capacitar a docentes para el dictado de la jornada a efectos de garantizar la transmisión de conocimientos en forma precisa, clara y actualizada sobre la problemática actual y futura;
- c) elaborar y distribuir materiales didácticos de apoyo a la tarea docente para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP);
- d) promover y ampliar la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de prevención y erradicación de la violencia de género, con el objeto de que los mismos formen parte de campañas masivas de comunicación social;

- e) intensificar los programas de sensibilización y prevención sobre la violencia de género en toda la población;
- f) elaborar estudios que permitan avanzar en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.

Artículo 4º – La jornada se realizará en forma obligatoria, al menos dos (2) veces durante el ciclo lectivo.

Artículo 5º - El Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación de la presente ley, articulará con el Consejo Federal de Educación, el Consejo Nacional de las Mujeres y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, las medidas necesarias para la concreción de esta Jornada.

Artículo 6º - La presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación.

Artículo 7º.-Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carmen Lucila Crexell.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

La violencia de género está reconocida como una cuestión de Derechos Humanos. En el inicio del siglo XXI, su erradicación es una de las asignaturas pendientes más importantes de la Humanidad.

La violencia de género es un problema social que afecta a todos los sectores de la población, incluida la población juvenil o adolescente. En este sentido, observamos que progresivamente se presentan más casos de jóvenes que ejercen violencia y que la sufren.

La violencia no se inicia normalmente con agresiones físicas sino con comportamientos de violencia psicológica que se apoyan en la desigualdad, favoreciendo el dominio y el abuso, sin que en ocasiones el adolescente tenga conciencia de estar ejerciendo o sufriendo violencia de género.

Los estereotipos sexistas existentes en la sociedad así como la manera en que asumimos, interiorizamos y reproducimos creencias, prejuicios y comportamientos basados en la desigualdad constituyen un terreno propicio para el surgimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.

La Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing (China) 1995, manifestaba que: "...La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

En el mismo documento, la violencia contra las mujeres se define como: "...todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad para las mujeres ya se produzcan en la vida pública o en la privada", "...es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo".

En este sentido, en el mes de marzo del año 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En el título II de la ley denominado “Políticas Públicas” establece que los tres poderes adoptarán las medidas necesarias para el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre las mujeres y varones.

El presente proyecto se enmarca dentro de estos lineamientos de política pública de derechos humanos con el objeto de fomentar en el ámbito educativo la enseñanza a través de una jornada que se ha denominado “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” que tendrá como finalidad que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación de la Nación, que en coordinación con las carteras provinciales educativas delinearán los contenidos de esta jornada, que se prevé que se realice en forma obligatoria al menos dos veces al año.

Asimismo, el mencionado ministerio contará con la colaboración del Consejo Federal de Educación, el Consejo Nacional de las Mujeres y

el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para concretar los objetivos de este proyecto

La escuela es el medio ideal para acceder a la población juvenil y poder introducir valores igualitarios y libres de prejuicios, además de proporcionar modelos de relación desde la igualdad y el respeto a las diferencias individuales de cada persona.

Es necesario intervenir con la población joven tanto para actuar en los casos en que se den situaciones de violencia de género, como para realizar una labor de prevención y detección precoz de la misma. Para ello es imprescindible desarrollar la educación en y para la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. También, es necesario facilitar un adecuado conocimiento del inicio y evolución de la violencia de género con la finalidad de detectar y rechazar la violencia desde las primeras fases de la misma.

Queremos resaltar la gran responsabilidad e importante labor de la escuela como agente social de cambio, transmisora de valores de igualdad y respeto a las diferencias, ya que en muchas ocasiones se queda bastante sola frente a la potente maquinaria de transmisión de valores vinculados a la violencia que hay en la sociedad.

En esta tarea es fundamental la labor de los maestros y profesores de los centros educativos ya que tanto a través de sus enseñanzas como de los valores que transmitan van a influir en el alumnado respecto a la formación de su identidad de género y por consiguiente en las relaciones que se establecen entre niñas, niños y adolescentes.

Si bien, actualmente se han desarrollado innumerables tareas, aún debemos recorrer un largo camino. Puede mencionarse que la Dirección de Política Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se encuentra realizando una encuesta de violencia contra las mujeres.

El estudio propone obtener un diagnóstico de victimización en mujeres mayores de 18 años de edad acerca de experiencias sobre violencia física, sexual y psicológica ejercida por hombres.

La recolección de datos se obtiene telefónicamente por personal especializado desde el mes de agosto del año 2013. A la fecha, el ministerio posee una muestra territorial provisoria porque faltan datos de algunas jurisdicciones.

Por otro lado, en estos últimos años se viene trabajando fuertemente desde todos los poderes del Estado. Como ya se mencionara el Legislativo sancionando leyes referidas al tema. Desde el Poder Judicial con la creación de la “Oficina de la Mujer”, por iniciativa de la

extinta Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dra. Carmen María Argibay, y de la “Oficina de Violencia Doméstica”, cuya pionera es la Dra. Elena Highton de Nolasco, que desde el año 2006 viene realizando una intensa labor con resultados altamente positivos.

La violencia doméstica es una de las principales causas de lesiones y muertes de mujeres en todo el mundo. No puede considerarse como un problema del ámbito familiar o privado, es un grave problema social que imposibilita la convivencia en términos de igualdad entre los seres humanos, a la vez que afecta gravemente a la salud, la vida personal y laboral de las víctimas y en la mayoría de los casos sus consecuencias se hacen extensibles a los niños.

Con respecto a la jurisprudencia, en un fallo inédito el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Capital Federal encuadró las conductas de hostigamiento, intimidación, amenaza, secuestro y golpiza de un joven a su ex mujer como “violencia contra la mujer” y lo condenó a cinco años de prisión. Puntualmente, la sentencia objetó que “las sucesivas denuncias” efectuadas por la mujer “recibieron tratamiento separado, empobreciendo la investigación, sin advertir que todas se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas con otras y reflejaban los extremos de incremento de intensidad en una espiral típica de los casos vinculados a esta clase de violencias”.

El fallo fue muy elogiado por la mencionada Oficina de Violencia Doméstica por el encuadre jurídico de la sucesión de hechos que se le imputaban al agresor, destacando que: “Todas las conductas imputadas tuvieron por finalidad someter, vulnerar, hostigar y lastimar a la mujer”. El TOC 9 se encargó de resaltar que los hechos constituyen “violencia contra la mujer” en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (conocida como Belem do Pará) y que esa categorización tiene relevancia jurídico-penal, es decir, que exige un tratamiento diferente que, en el caso, y tal como lo señala la sentencia, no se cumplió durante la investigación.

La singularidad del fallo del TOC 9 es que no sólo encuadra los episodios investigados en el marco de una relación de violencia de género -con sus particularidades-, sino que además impone una condena de cumplimiento efectivo.

El citado fallo está en línea con una reciente resolución del juez de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, por la cual negó la excarcelación a un hombre que incendió la moto de su ex esposa y rompió la vidriera de su comercio, porque entendió que la agresión se dio en un contexto de violencia de género y consideró que la mujer corría peligro de femicidio.

Según lo informado por la Oficina de Violencia Doméstica la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que derivan en la Justicia Penal son archivados. Los pocos que avanzan en un juicio terminan con el imputado beneficiado por una probación -por el monto de la pena aplicada- o el acuerdo de un juicio abreviado, donde el acusado reconoce la culpabilidad de los hechos y el fiscal propone una pena -generalmente- “en suspenso”.

En otro caso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en una causa en la que se le había imputado a un hombre el delito de abuso sexual, agravado por haberse cometido mediante acceso carnal a su esposa. De esta manera, la Cámara anuló la sentencia absolutoria del Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal y ordenó dictar una nueva sentencia conforme derecho.

La sentencia, de fecha 25 de abril de 2014, se sustenta y encuentra fundamento especialmente en la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará-. La Cámara entendió que resulta inadecuada "la consideración de la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas como una cuestión privada" o de "pareja". Sostuvo también que "la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) impone a los estados partes la obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basadas en (...) funciones estereotipadas de hombres y mujeres".

El juez Alejandro Slokar, a cuyo voto adhirió el juez Pedro David, expresó en los fundamentos del fallo que "resulta inadmisibles sostener que una persona, por ser paraguaya, se ve impedida de comprender que no tiene derecho a violar a su esposa, toda vez que existe una regla general que establezca aquella permisión ni en la República Argentina, ni en la "Villa 21", tampoco en la República del Paraguay; muy por el contrario, las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos se encuentran vigentes en estos ámbitos espaciales."

Los gobiernos, las familias y la población en general debemos trabajar activamente en la búsqueda de soluciones a este flagelo. Deben crearse recursos que faciliten el apoyo técnico y el tratamiento necesario para quienes deseen salir del camino de la violencia.

Se debe fomentar la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diferencia, la comunicación exenta de violencia, la negociación al intentar resolver los conflictos, previniendo y rechazando las actitudes

y los comportamientos violentos. Se requiere pues, trabajar por un entorno que proteja los derechos humanos, la democracia y la solución pacífica de estos problemas.

Las personas no nacen violentas. La violencia se aprende.

Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que para lograr que se lleve a cabo esta jornada y se cumplan con los objetivos señalados es necesario un trabajo coordinado y mancomunado entre las jurisdicciones involucradas, los docentes, los alumnos, los padres y la sociedad en general, dado que la violencia hacia las mujeres es un tremendo flagelo que debemos superar lo más pronto posible; es por ello que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

Carmen Lucila Crexell.